

Gabriela Rojas Breu

PSICOLOGÍA Y EJECUCIÓN PENAL: ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE HISTORIAS CRIMINOLÓGICAS EN EL MARCO DE PARADIGMAS EN DISPUTA.

GABRIELA ROJAS BREU (Facultad de Psicología,
Universidad de Buenos Aires, Argentina)
grojasbreu@gmail.com

Resumen: El presente trabajo indaga el rol de la psicología en la ejecución penal, considerando las distintas fuentes de regulación legal y paradigmas asociados: el paradigma de derechos humanos que concibe a la salud mental como derecho y el enfoque del control social que la valora en términos de riesgo. Esto implica analizar el soporte y la letra de la Ley 26.657 (Ley Nacional de Salud Mental), la Ley 24.660 (Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad) y las normativas institucionales derivadas de esta. Asimismo, expone el nivel de eficacia simbólica de dichos paradigmas. A partir de un diseño de investigación cualitativo que emplea un análisis histórico y documental, arriba a las siguientes conclusiones: la psicología responde a regulaciones legales que colisionan en el marco de la ejecución penal, a predominio de impulsos solidarios del control social. Esto responde a la pregnancia de formulaciones positivistas, que desplazan a un segundo plano la herencia de la escuela clásica y los aportes de las perspectivas críticas. No obstante, la realidad actual encuentra un soporte dinámico y polifónico que enriquece los debates y jerarquiza sus productos.

Palabras clave: Salud mental; control social; escuelas criminológicas; patologización; paradigma etiológico.

Abstract: This paper investigates the role of psychology in criminal justice, considering the various sources of legal regulation and their associated paradigms: the human rights paradigm, which conceives of mental health as a right, and the social control approach, which values it in terms of risk. This involves analyzing the foundation and the letter of Law 26.657 (National Mental Health Law), Law 24.660 (Law on the Execution of Prison Sentences), and the institutional regulations derived from them. It also exposes the level of symbolic efficacy of these paradigms. Based on a qualitative research design that employs historical and documentary analysis, it reaches the following conclusions: psychology responds to legal regulations that collide within the framework of criminal justice, with the predominance of solidarity-based impulses of social control. This is due to the prevalence of positivist formulations, which relegate the legacy of the classical school and the contributions of critical perspectives to the background. However, current reality finds a dynamic and polyphonic support that enriches the debates and prioritizes their products.

Keywords: Mental health; social control; criminological schools; pathologization; etiological paradigm.

Forma de citar: Rojas Breu, G. (2025). Psicología y ejecución penal: análisis de los modelos de historias criminológicas en el marco de paradigmas en disputa. *Prisiones. Revista electrónica del Centro de Estudios de Ejecución Penal*, 8, 65-82.

Gabriela Rojas Breu

Recibido: 29-09-2025 | Versión final: 03-12-2025 | Aprobado: 04-12-2025 | Publicado
en línea: 23-12-2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Gabriela Rojas Breu

PSICOLOGÍA Y EJECUCIÓN PENAL: ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE HISTORIAS CRIMINOLÓGICAS EN EL MARCO DE PARADIGMAS EN DISPUTA.

Gabriela Rojas Breu

I. Introducción.

La psicología es un insumo destacado de la criminología, ciencia transdisciplinar vital en la ejecución de la pena. Su contribución a dicha ejecución se encuentra prevista en un corpus normativo específico, en el que se destaca la Ley 24660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, entre otras normas. Esta previsión puede eclipsar la regulación legal primaria de la psicología, que descansa en la Ley de Ejercicio Profesional (Ley 23.277) y la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657). Las características institucionales/instituidas y las tradiciones teóricas asociadas contribuyen a dicho eclipse. Dada la importancia de promover la eficacia simbólica de la ley en general y preservar la etización de la disciplina en particular, resulta necesario abordar la vigencia del espíritu y letra de la Ley 26.657 en el marco de la ejecución penal. Esto cobra mayor elocuencia si se abrazan las perspectivas críticas en la materia, dado que alejan la práctica profesional del control social. Ahora bien, asumir estas perspectivas no es un acto discrecional en tanto estas configuran el paradigma en el cual se inscribe la mentada Ley de Salud Mental. Sin embargo, es importante insistir en que la cristalización de dicho paradigma en una ley positiva no implica su eficacia simbólica real y garantida. Esta observación es extensiva a todos los ámbitos de inserción del psicólogo pero se hiperboliza en el campo penal toda vez que el control social formal es particularmente evidente y constituye un norte de muchas de sus operaciones. Esto, asimismo, es sostenido por un cuerpo de creencias, prácticas y normas vinculadas al control social punitivo. De esta manera, la letra de la ley de Salud Mental, el espíritu que la soporta y lo establecido por la Ley de Ejercicio Profesional de la Psicología corren riesgo de debilitarse en pos de otros impulsos normativos de diversa jerarquía que cuentan con resortes solidarios con el control social.

De esta manera, las coordenadas del problema planteado en el presente trabajo descansan en dos ejes: por un lado, el imperativo legal que signa la práctica profesional del psicólogo y por otro, la realidad normativa institucional que delimita la mentada práctica. La pregunta problema podría formularse en los siguientes términos: ¿Qué modalidad de vinculación se puede identificar entre aquellos imperativos legales y la normativa institucional? La hipótesis ofrece una respuesta posible a esta pregunta: esta vinculación se establece en términos de colisión. En efecto, el enfoque de derechos y las perspectivas críticas que signan la regulación del ejercicio profesional son contrarias a la vigencia de la patologización de quien delinque y el paradigma etiológico, vigentes en la normativa institucional actual y resortes del control social. Sin embargo, la misma ha presentado matices en un eje diacrónico que permite matizar esta aseveración.

Para acceder a la finalidad expuesta, se aplica un diseño de investigación cualitativo que incluye el análisis histórico y documental. Este análisis tiene por fin identificar el lugar atribuido en el campo de la criminología a las variables psicológicas asociadas (o no) al delito y la pena. Dicho análisis se desagrega en dos segmentos. El primero traza un eje diacrónico, que aborda las variables supra expuestas en la escuela clásica de derecho

Gabriela Rojas Breu

penal, la escuela positiva y las perspectivas críticas, toda vez que se pueden reconocer en la actualidad sus huellas en el escenario institucional. El segundo segmento toma como analizador a la Historia Criminológica dado que, conforme lo establece la Ley 24.660, centraliza los aspectos que articulan la psicología, el delito y la pena. El corpus seleccionado se ciñe a las normativas aprobadas en el Servicio Penitenciario Federal.

La necesidad de un despliegue reflexivo y crítico de la práctica profesional de la psicología convierte en imperioso este tipo de trabajos. La relevancia se funda en este aspecto y se extrema en la relativa vacancia de su tratamiento.

II. La psicología y su regulación legal primaria: consideraciones sobre el Paradigma marco de la Ley Nacional de Salud Mental y el control social.

Dado que este trabajo indaga la vinculación entre la regulación legal de la psicología y su vigencia en la ejecución penal, se impone comenzar citando a la Ley Nacional de Salud Mental. La misma se cimenta en el paradigma de Derechos Humanos y reconoce sus orígenes en los principios emanados de la *Reforma Psiquiátrica de Trieste*, ocurrida en la década del 70, en Italia. Esta reforma redundó en un profundo cambio en los enfoques de la atención a los usuarios del sistema de salud mental y en la concepción de la salud/enfermedad (Llull Casado, 2025). Una de las operaciones que más impulsó este cambio fue la reposición de la elisión de variables sociales, económicas, políticas e históricas que el modelo médico persiste en negar. Esto es claramente expuesto por uno de los referentes de este movimiento, Basaglia, quien concreta esta denuncia no solo desde el plano del enunciado sino desde la misma enunciación. En efecto, acompaña sus locuciones con hechos trascendentes que metacomunican su concepción del “loco” y “criminal” como sujetos de derechos y preserva la complejidad que estos constructos sociales poseen. Respecto de los primeros, por otra parte, impulsa la Ley 180¹, cuyo espíritu se reencuentra en nuestra Ley Nacional de Salud Mental.

Interesa en este punto localizar la tesis central de Basaglia (1987): la patologización como herramienta política para eliminar la alteridad en el marco del *proceso de absolutización del diferente*. Este proceso involucra la criminalización de las necesidades, es decir, la transformación de una necesidad en un delito. ¿Por qué? Porque de esta manera deja de ser imperioso responder a esa necesidad y, contrariamente, se la puede castigar bajo la modalidad de la segregación y eliminación de su agente. Esta transformación, por otra parte, va a ser *naturalizada*. Esto significa que el delito se va a divorciar de su origen social, histórico y político para ser considerado un rasgo individual, natural e irreversible. Finalmente, se va a reducir la complejidad del sujeto social a este único rasgo: sólo se es delincuente. El delito deja de ocupar el lugar de objeto directo o núcleo verbal en términos sintácticos para ser predicativo subjetivo obligatorio, elevando el rasgo a estatuto identitario: se pasa de afirmar que la persona condenada robó (o cometió un delito) a afirmar que esta persona es delincuente. De este modo, se edifica una única respuesta: el control social punitivo.

Estos postulados, formulados en clave crítica, denuncian un lugar estructural común para dos instituciones cerradas y totales - el manicomio y la cárcel - y sus destinatarios.

¹ Conocida como “Ley Basaglia”.

Gabriela Rojas Breu

Esta agrupación se desprende de criterios macro políticos y económicos, vinculados con la esfera productiva. Ahora bien, esto permanece velado y sustituido por explicaciones basadas en factores etiológicos individuales y naturales. En este punto, es importante destacar que esta maniobra, en algunos aspectos, permanece intacta. La pretensa prescripción del positivismo es negada por las prácticas actuales, lo cual obedece, al menos en parte, a la pregnancia que tuvieron las variables biológicas y hereditarias, como así también al determinismo y al innatismo asociados en el discurso positivista. Dado que estos “ropajes” han sido desechados, se asume que la matriz lógica del positivismo también lo ha sido. Sin embargo, la misma se ha mantenido inalterada dado que otras fórmulas garantizan la persistencia de la segregación: la psicopatologización que transforma lo social, político, económico e histórico en condiciones individuales, patológicas y diferenciales. Probablemente, esta invisibilización es condición para tal persistencia. En este sentido, estas maniobras y mecanismos propios del positivismo pueden reencontrarse en la actualidad en la presencia de la “génesis de la conducta delictiva”, informe que integra de manera dilecta las historias criminológicas aún en la actualidad. O, asumir en acto, que todo aquel que delinque posee una patología psíquica, por lo cual cada historia criminológica debe incluir un informe psicológico en el que se explicita un diagnóstico en clave psicopatológica.

Volviendo al espíritu y letra de la Ley Nacional de Salud Mental, su norte es claro: prioriza los abordajes sanitarios desde el enfoque de derechos y debilita toda intención de control social. Asimismo, al considerar la salud mental como *un proceso* integrado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, la ley inhibe cualquier coqueteo con el determinismo, el reduccionismo y la absolutización. La salud mental, entonces, no solo no es un estado determinado ni una condición diferencial sino una construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos².

III. Delimitación de las variables psicológicas en las distintas escuelas criminológicas: la construcción de la responsabilidad.

Sin pretender alcanzar la exhaustividad al respecto, se considera necesario ubicar la construcción de la responsabilidad del autor en la ejecución penal desde una perspectiva histórica dado que este constructo se erige en la vía regia para acceder a las diversas formas de articulación entre la psicología, el delito y la pena en cada caso.

III.1. La responsabilidad en la escuela clásica: el reproche moral para sujetos iguales.

Es posible empezar afirmando que la escuela clásica, solidaria del pensamiento iluminista, sienta las bases del Estado de Derecho y garantías asociadas. El principio de legalidad no se puede pensar sin ella y el delito no puede pensarse por fuera del contrato social: lejos de ser un dato preconstituido y natural, es efecto de la transgresión a la construcción social que supone tal contrato. Y este contrato no está sino integrado por leyes que son -o debieran ser- pactos entre hombres libres (Beccaria, 1764, p. 67). Las penas, por tanto, no pueden pensarse por fuera del acto dañoso, en consonancia con el derecho penal de acto. El acto cifra y gradúa las penas, que deberán ser útiles y necesarias, fundamento de su límite: el Estado tiene un límite en el ejercicio del derecho de penar.

² Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, promulgada diciembre 2 2010.

Gabriela Rojas Breu

Fue, pues, la necesidad la que constriñó a los hombres a ceder parte de la propia libertad: es, pues, cierto que cada uno no quiere poner de ella en el depósito público más que la mínima porción posible (...). La agregación de estas mínimas porciones posibles constituye el derecho de penar; todo lo demás es abuso y no justicia; es hecho, no ya derecho. (Beccaria, 1764, p. 61)

De esta manera, la limitación de la violencia del Estado es un aporte de esta escuela al tiempo que la consideración del delito como constructo social y agenciado por alguien con libre albedrío es uno de sus rasgos distintivos. Las variables psicológicas, entonces, no tendrían participación en este esquema, dado que descarta patologías de índole individual oponiendo, en su lugar, factores morales. El acto es el destinatario de la reacción penal. El reproche es moral.

III.II. La responsabilidad en la escuela positiva: la patologización determinista.

Los planteos de la escuela clásica, entre los que se privilegia el libre albedrío en relación al delito, tienen como correlato la idea de una responsabilidad *moral*. Asimismo, supone una hipóstasis basada en una abstracción que es revertida por la escuela positiva (Baratta, 2004): las causas del acto y su agente, el “hombre criminal”. En efecto, esta escuela va a ser quien desplace el foco atencional del acto a su autor y sature de enunciados “científicos”, todo lo vinculado a aquel, dejando en segundo plano al delito.

Así pues, desde este enfoque comenzó a tener relevancia la pregunta sobre cómo detectar al sujeto criminal (según la clasificación de Enrico Ferri), basándose en la concepción positivista del delito de la Escuela Inglesa de Galton (de antropometría criminal) y la Escuela Italiana de César Lombroso (de antropología criminal). (Varela, 2020, p. 27)

Al desplazar el interés por el acto y centrarse en el infractor, se introduce el paradigma etiológico, la patologización del delito y la condición diferencial del criminal por la cual se admite el derecho penal de autor y conceptos asociados tales como la peligrosidad: “la voluntad y libertad del infractor postuladas por la escuela clásica van a ser sustituidas por el determinismo”. (Varela y Rojas Breu, 2021, p. 14). Y si hay determinismo, no hay responsabilidad. En palabras de Lombroso (1876), el delito es un fenómeno tan necesario, como el nacimiento, la muerte, la concepción. Esto convierte a quien delinque en peligroso y exige estudiar y predecir científicamente la peligrosidad.

Las *causas* del delito, entonces, se buscarán en el autor, en clave patológica, determinista y diferencial, con criterios que admiten tipologías y clasificaciones al tiempo que la pena asume carácter tratamental y correccionalista. El delito, en esta concepción, pasa a ser secundario al delincuente, dado que es sintomático de la personalidad anómala. En palabras de Grispigni (1947), es un síntoma de triple filiación: la individualidad psíquica; la peligrosidad y el defecto psíquico. Esta filiación orientará respecto del tratamiento necesario para tal patología.

En aras de contener esta peligrosidad será, entonces, la sociedad la que deba agenciar esta responsabilidad: “las sociedades tienen los criminales que se merecen” (Lacassagne, citado en Anitua, 2005, p. 192). En este sentido, la responsabilidad moral de

Gabriela Rojas Breu

la escuela clásica será sustituida aquí por la responsabilidad social: “Si no es posible imputar el delito al acto libre de una voluntad (...), sí lo es sin embargo referirlo al comportamiento de un sujeto, y esto explica la necesidad de una reacción de la sociedad” (Baratta, 2004, p. 33).

Es dable mencionar que esta indagación respecto a la etiología de la peligrosidad con ropajes científicos impactó en el discurso oficial marcando un hito fundacional de la criminología: es a condición de negar la relación del crimen con el orden social y el poder implicado que este saber adquiere estatuto de “ciencia”, legitimante del derecho penal de autor:

No se incorporaba toda la realidad sino solo aquella que era construida por el propio sistema al seleccionar ciertas personas, tarea que por otra parte se “naturalizaba”. La tarea reductora de la “ciencia” tenía elementos importantes del propio racismo que provocarían la pugna insoluble entre el derecho penal de “autor” y el derecho penal de “acto”. (Anitua, 2005, p. 223)

Con esta cita es dable incorporar la perspectiva crítica que visibiliza el vínculo entre el delito y el orden social, descarta la idea del delito como un síntoma natural perpetrado por seres diferentes y patológicos y propone otro desplazamiento.

III.III. La responsabilidad en las perspectivas críticas o “nueva criminología”.

Si la escuela clásica se enfoca en el acto delictivo y la escuela positiva, en el “hombre criminal”, las perspectivas críticas - agrupando un conjunto rico y heterogéneo - lo hacen en torno al sistema penal y la reacción social. Y para esto, cuestiona el orden social e incorpora el poder como variable de análisis, otrora elidido,

... en función “del interaccionismo simbólico” y luego con la sociología del conflicto, la criminología extiende su ámbito al “sistema penal” (...) y, en definitiva la íntima conexión con el poder. De la “criminología centrada en la conducta criminal” se pasó a la llamada “criminología de la reacción social”. (Zaffaroni, 2003, p. 8)

De esta manera, esta perspectiva criminológica no solo deja de aislar al crimen de su inscripción macrosocial, histórica y política sino que esta misma matriz se erige en SU objeto de estudio, toda vez que analiza la función del sistema penal y su operatividad (Zaffaroni, 2003, p. 19). Sistema penal y orden social son elementos que se conciben de manera sinérgica, donde la selectividad y la violencia son signos inherentes al primero en pos de la continuidad del segundo. Ahora bien, si este orden social se sostiene en el marco de esta “guerra de la paz” (Basaglia, 1987), ¿qué respuesta se le puede pedir a la persona criminalizada? En tal caso, la responsabilidad será judicial (Zaffaroni, 2003), en tanto es quien puede limitar la acción criminalizante injusta. ¿Por qué? Porque la reproducción de la mentada violencia y selectividad lesionan la dimensión ética del reproche (Zaffaroni, 2012, p. 265 - 270). Esto no significa entender que quien delinque es solo “efecto de sistema” y negar su propia agencia sino, en todo caso, que solo es dable reprochar el “esfuerzo personal por la vulnerabilidad” en el esquema de la clínica de la vulnerabilidad expuesta por Zaffaroni (2005, 2012), Y de ninguna manera el “estado o posición de vulnerabilidad”. Esto limita la responsabilidad individual, al tiempo que la remite a la autoridad judicial, en tanto el

Gabriela Rojas Breu

derecho deberá limitar la violencia del sistema penal aspirando a la etización del derecho penal (Zaffaroni, 2005, p. 270 – 281).

La nueva criminología, entonces, denuncia el vínculo entre la respuesta penal, la política y el crimen, y concibe a este último como efecto del discurso jurídico. Este principio junto con el rechazo a la tesis del delincuente como un individuo diferente, son aspectos esenciales de la nueva criminología (Baratta, 2004, p. 22). Ahora bien, es necesario visibilizar otra relación estructural: el derecho y la política. Este vínculo entre el poder político y el derecho ya fue subrayado por Locke: “el poder político es derecho de dictar leyes bajo pena de muerte” (citado por Simonetti y Virgolini, 2003, p. 98). Esto supone considerar al derecho como la inscripción jurídica de una lucha de fuerzas (Grüner, 2007). En efecto, la política es el arte de transformar tendencias sociales en formas jurídicas (Heller, 1992, p. 223). La criminología, en este sentido, asume su función como recurso privilegiado para la operacionalización de este orden que cristaliza dicha inscripción jurídica:

...el derecho es efecto de la política que encuentra en la criminología un recurso para cristalizar estructuras sociales determinadas: la relación entre política y criminología asume una condición necesaria, en tanto la primera recorta el orden público y sus lesiones: los crímenes. (Simonetti y Virgolini, 2003, parafraseado por Varela y Rojas Breu, 2020).

La serie parte de lo político, que establece un orden social injusto cristalizado en el derecho y apoyado en discursos “científicos” encargados de velar este origen y perpetuar dicho orden: la criminología es “una pluralidad de discursos (...) orientados hacia la solución de un problema común: cómo garantizar el orden social” (Pavarini, 1983, p. 18).

El crimen, entonces, no solo es efecto de lo jurídico sino de lo político. Y la pena, también: “La pena no es más que un hecho de poder y la teorización en torno de la misma no pasa de ser una tentativa legitimante de todo el ejercicio del poder penal” (Zaffaroni, 2012, p. 282). La política dicta leyes e impone penas. Por otra parte, la sanción penal nos conduce a un campo complejo, toda vez que convoca un partenaire particular: el autor. Esto compele al psicólogo a sostener prácticas que preserven el derecho penal de acto, aún cuando las demandas no obsten lesionarlo. El margen de equilibrio entre el abordaje en el campo de la subjetividad (cuyo interlocutor es el sujeto penado) y las opiniones profesionales que impacten en la ejecución de su pena (cuyos interlocutores son organismos colegiados y actores del poder judicial) es muy estrecho, por lo que la agudeza ética y profesional se presentan inexorables.

Ahora bien, si el sujeto de la pena es aquel que no ha convertido en propio un interés ajeno, o no reprodujo la coerción en sí mismo (Basaglia, 1987), el delito deja de ser un síntoma individual para ser un hecho político:

es condición del orden no solo la pretensión del Estado de mandar sino la construcción de ciudadanos que se conviertan sus propios vigilantes, de la subjetivación de la violencia objetiva renegada, fuente de legitimidad social (Grüner, 2007: 51). A falta de subjetivación de esta violencia, advendrá de manera externa la violencia hecha pena. En caso de advertir los nexos entre la obediencia y el poder político y ante la intención de revertir las coordenadas del orden social, la masacre

Gabriela Rojas Breu

advendrá descosiendo los ropajes de la ideología científica que legitimaban la violencia (Basaglia, F., 1987). (Varela y Rojas Breu, 2021)

En síntesis, la nueva criminología desnuda la intimidad entre la criminología positiva y la política, velada por “operaciones técnicas”, “mediciones” y estadísticas que individualizan lo social. Asimismo, demuestra cómo se recorta como ciencia autónoma a partir de esta maniobra: “Criminología, política y orden, entonces, admiten inscribirse en un mismo eje al tiempo que se niegan mutuamente” (Varela y Rojas Breu, 2021, p. 21). Esta perspectiva, entonces, entenderá a la salud mental como un derecho, elaborando herramientas conceptuales para neutralizar la eficacia del control social.

IV. Ejecución penal: el corpus normativo y la realidad institucional.

Este apartado renuncia a la exhaustividad y privilegia aquellos segmentos del corpus jurídico que impactan particularmente en la práctica profesional en el ámbito penitenciario. De esta manera, la prelación será inversa a la pirámide kelseniana toda vez que, por sus niveles de operacionalización, se les atribuye mayor efecto a boletines públicos normativos que a instrumentos jurídicos de derechos humanos. Sería esperable que esto obedezca solo a la mentada operacionalización, sin discontinuidades al respecto, pero esto requiere un análisis que excede los márgenes del presente artículo.

Aclarado este punto, es imperioso analizar sucintamente el artículo inaugural de la Ley 24.660, toda vez que establece la finalidad de la pena y su relación con el delito y su autor. El artículo 1° de la Ley 24660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, modificado por ley 27.375/17, reza lo siguiente:

La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto.

El régimen penitenciario a través del sistema penitenciario, deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada.

Algunas observaciones al respecto permiten afirmar que la pena y el reproche recaen sobre el condenado, que es quien debe adquirir algo que no tiene: la capacidad para respetar y comprender la ley. Es decir que la pena se piensa como una instancia en la que el sujeto pueda vincularse con la ley desde la observancia (signada por el respeto) y desde la adherencia comprensiva que asume no solo una instancia intelectual sino también valorativa. Esta dimensión abandona la elipsis en la adjetivación tanto del acto penado como de su sanción, calificados como *graves*. Este carácter de sanción restringe la interpretación del sentido de la pena como así también la calidad por la cual se establece que “la comprensión y el apoyo de la sociedad” debe leerse como control directo e indirecto. Finalmente, es importante subrayar que resurge la idea de la rehabilitación, vitalizando impulsos positivistas solidarios de la patologización de quien delinque y debilitando la co-

Gabriela Rojas Breu

responsabilidad social que el principio de reinserción social incorporaba en 1996 (López y Machado, 2004). De esta manera, esta manda legal indica un proyecto institucional que preconiza variables subjetivas como objeto de la intervención. Estas variables van a trazar el rol del psicólogo en las evaluaciones correspondientes.

Ahora bien, este enunciado encuentra resistencias que llegan a cristalizarse en normativas en el Servicio Penitenciario Federal bajo el amparo de principios constitucionales. Esto marca un momento en el que algunos aspectos de las perspectivas críticas perforan los muros y alcanzan intervenciones institucionales. Si bien esto no excedió el espasmo, dejó una huella que puede pasar inadvertida, por lo que es menester destacar.

A los efectos de analizar la articulación entre el rol del psicólogo y la valoración de la salud mental en el marco de la ejecución penal, se tomará como analizador destacado la evolución de Historia Criminológica en los aspectos que involucren a dichas variables.

*IV.I. Distintos modelos de Historias Criminológicas en el eje diacrónico.**IV.I.I. Período 1980-2019.*

Si pensamos en la articulación entre la variable salud mental y su ponderación en el marco de la ejecución penal, es posible afirmar que hasta el año 2019 operó la patologización en términos diferenciales y extensivos de corte positivista. En efecto, las personas condenadas debían clasificarse basándose en los tipos criminológicos de Ferri, Seeling y Hurwitz y consignar criterio de peligrosidad³. Este término es excluido del escenario penitenciario por comunicaciones institucionales sin estatuto normativo al inicio del corriente siglo. El mismo es trocado por la palabra “riesgo” pero sin exceder los límites del eufemismo. Más allá de esta normativa, las clasificaciones antedichas fueron dejándose de lado, pero no la patologización y el paradigma etiológico, vigente tanto en el “informe psicológico” como en la “génesis de la conducta delictiva”. Esto excede la labor del profesional actuante toda vez que la norma indica que el informe psicológico debe incluir un diagnóstico en clave psicopatológica. Esto implica hipostasiar la conexión entre el delito y la patología psíquica individual (y diferencial).

IV.I.II. Período 2019-2021.

El modelo anterior de historia, vigente por más de 40 años, es desplazado en el año 2019⁴, con la implementación del “Sistema de Plan de Sentencia”. Este sistema *no* comporta un cambio en la Historia Criminológica pero impacta en ella dado que establece criterios para evaluar y medir progresos, estancamientos o retrocesos de la población penal condenada, como así también para el diseño de las intervenciones. Es importante destacar que este sistema debilita la discrecionalidad del modelo anterior (lesivo del principio de legalidad ejecutiva), dado que parte de un cuerpo teórico, al tiempo que abandona el determinismo del modelo positivista al incorporar en el centro de sus acciones los factores de riesgo dinámicos. En efecto, la criminología aplicada, el modelo de Riesgo Necesidad y Responsividad (RNR) y el Modelo de Desistimiento limitan la interpretación discrecional al

³ Boletín Público Normativo N° 1373 del Servicio Penitenciario Federal, citado asimismo por el Boletín Público Normativo N° 841 del Servicio Penitenciario Federal.

⁴ Disposición DN N° 82 del 22 de mayo de 2020, inserta en el Boletín Público Normativo N° 711 del Servicio Penitenciario Federal.

Gabriela Rojas Breu

momento de la valoración y, sin abandonar el paradigma etiológico, incluye un repertorio de variables sociales y vinculares en el marco de las necesidades criminógenas, los factores de riesgo y los factores protectores.

Sin embargo, este sistema, si bien no niega lo social, lo ubica a cuenta de lo individual diluyendo en este polo la complejidad irreductible de aquella dimensión: la pena recae enteramente en el infractor, sin convocatoria posible a otro actor enunciado pero no incluido: la “sociedad”. Este modelo de gestión de riesgos, entonces, va a reforzar algunos aspectos pero va a edulcorar otros.

Es importante destacar particularmente respecto a la Salud Mental que el *patrón de la personalidad antisocial y el historial de trastornos mentales* están concebidos como *factores de riesgo estáticos* en el modelo RNR (Andrews y Bonta, 1994), contraponiéndose de manera explícita con lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental en su letra y en su espíritu y reteniendo algo del determinismo pasado.

Sin embargo, es importante realizar una consideración particular respecto al Modelo de Desistimiento: su retícula conceptual y sus estrategias de intervención incluyen la dimensión política del crimen y su autor (Rojas Breu, 2020, p. 39). En efecto, el desistimiento es considerado un proceso que involucra al autor del delito y a la llamada “comunidad moral” (Maruna, 2001; Farrall, 2002; Laub y Sampson, 2003). Este proceso se asienta en tres niveles: el nivel primario - basado en la conducta -, el secundario - en la identidad - y el terciario, que involucra a la comunidad moral. Este nivel, entonces, alcanza la reintegración social que cabalga sobre nivel de pertenencia y aceptación de la mentada comunidad (Trotter, McIvor, y Mc-Neill, 2016). El desistimiento, entonces, no es solo un proceso personal, sino también político y social. Sin embargo, este aspecto del modelo no alcanza traducción plena en las prácticas institucionales. En efecto, se incorporan los factores protectores al tratamiento penitenciario en consonancia con los primeros niveles de este modelo, pero no con el tercero.

IV.I.III. Período 2021-2023.

Un cambio radical permite la entrada de perspectivas críticas a la esfera oficial por primera vez en la historia de la criminología del Servicio Penitenciario Federal. En abril de 2021⁵, se desalojan de las diversas evaluaciones variables tales como “la posición frente a delito”, el “desistimiento” y el “arrepentimiento”. Entre sus fundamentos, se destacan los argumentos constitucionales, ético-profesionales, tratamentales y epistemológicos que conciben a la persona condenada como sujeto de derechos (y no objeto del control social). En este sentido, este documento ubica el límite a la intervención del Estado a los efectos de respetar los derechos personalísimos de la población penal como así también las garantías constitucionales. De esta manera, destierra de manera explícita y enérgica las huellas del positivismo criminológico asistido por la psicología:

Todo registro sobre las respuestas afectivas (...) se construyen indefectiblemente sobre la intromisión en la vida interna (...) y el fuero íntimo de su personalidad: ámbitos en los cuales el Estado no puede inmiscuirse. La actitud de “juzgamiento de

⁵ Disposición IDN SPF N° 329 del 13 de abril de 2021, inserta en el Boletín Público Normativo N°735, que deroga los puntos 3, 4, 5 y 6 del apartado VI del mentado Boletín Público N° 1373

Gabriela Rojas Breu

autor” resulta absolutamente incompatible con el principio de derecho penal de acto al cual nuestra Constitución adhiere (artículo 18 y artículo 19; artículo 9 Convención Americana sobre Derechos Humanos); según el cual se castiga la acción desplegada conforme la tipificación del hecho punible, independientemente del grado de peligrosidad del autor y las características personales. (BPN 735)

El principio de reserva tutelado por el artículo 19 de la Constitución Nacional obsta indagar el “arrepentimiento” y la “producción de sentimientos, emociones o deseos específicos” en torno al acto penado y la condena. Este documento agregará, por otra parte, que exigir la declaración de arrepentimiento “compromete seriamente la regla constitucional consignada en el artículo 18 que prohíbe la autoincriminación, así como también en el artículo 14 apartado “g” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Estas afirmaciones son solidarias con el desplazamiento de la función de la salud mental en el campo de la criminología: pasa de ser un insumo del control social a ser un derecho. Las normativas instituciones encuentran en este momento una excepción a la colisión con lo normado en la Ley 26657, confirmándola en todos los planos.

Interesa destacar, más allá de lo enunciado, que este boletín reconoce las fuentes últimas del actuar del Estado durante la ejecución penal en la Constitución Nacional y en el paradigma de los Derechos Humanos, al igual que la Ley 26657, razón por la cual la comunión entre ellas resulta posible.

Por lo expuesto, las Historias Criminológicas dejarán de consignar variables psicológicas tales como arrepentimiento, sentimientos de culpa, posicionamiento frente al delito, conciencia del daño, capacidad empática, presencia de deseos reparatorios o reivindicativos, de emociones como el miedo, la satisfacción, indiferencia, entre otras respuestas afectivas en torno a la conducta delictiva (y sus víctimas), a la condena recibida y/o a la propia situación de encarcelamiento del interno/a⁶. Insistimos en este punto: esto ubica a la salud mental como un derecho y no como un constructo predictor (o no) de riesgo al servicio del control social.

Este BPN 735 debe leerse en conjunto con el BPN 793/2022 e inaugurando un cambio de paradigma respecto a la Historia Criminológica modelada en 1980, que pasa a ser una Historia Criminológica Interdisciplinaria (en adelante, HCI) que entiende a la persona privada de la libertad como sujeto de derechos y parte integrante de la sociedad (BPN 793/2022). Esto se traduce, entre otros aspectos, por invertir algunas coordenadas previas: quien debe responder es el Estado, toda vez que es su obligación brindar a la persona condenada las condiciones necesarias para un desarrollo personal que favorezca su integración social. La HCI es un instrumento que abona a este fin, recogiendo el mandato de la Ley 24660 de formular el diagnóstico y pronóstico criminológicos (a través del estudio médico-psicológico-social), pero haciendo de lo no dicho una elipsis con reposición. Esa afirmación obedece a que incorpora la indagación de las variables de vulnerabilidad psico-social (daños por la privación de derechos fundamentales en las etapas más frágiles de la existencia) y socio-penal (condiciones socio-estructurales que propician mayor posibilidad

⁶ BPN 735 del Servicio Penitenciario Federal.

Gabriela Rojas Breu

de establecer vínculos conflictivos con la ley), lo que la convierte necesariamente en interdisciplinaria:

La introducción de ambos aspectos como variables de análisis nos impide reducir los estudios incorporados en la HCI a indagaciones de factores etiológicos individuales.

La cuestión criminal no se agota en la existencia del individuo que delinque, por el contrario, el delito resulta un fenómeno multicausal, que requiere un abordaje interdisciplinario integral. (BPN 793/2022)

Esta cita debe leerse como un claro rechazo al paradigma etiológico. La HCI se opone a la idea de una “génesis de la conducta delictiva” de un sujeto diferente y anómalo. Contrariamente, considera un conjunto de “factores que han generado las condiciones para su emergencia [del delito], partiendo del análisis de las circunstancias del acto penado relativas a sus componentes históricos, políticos, socioeconómicos, culturales, psicológicos y eventualmente biológicos”. Se revierte el movimiento positivista y lo hace de la mano de la búsqueda de la concreción de los Derechos Humanos. Diversos pasajes de este documento reeditan la vigencia de la dimensión política y social, como así también la inscripción del mentado paradigma y la adherencia a los enfoques diferenciados.

El rechazo a este paradigma etiológico se materializa en la eliminación del informe “Génesis de la conducta delictiva” y su reemplazo por un “Informe Final Integrador”. El cambio no solo es de forma dado que este último no pretende arrojar una hipótesis causal del delito sino una *Síntesis del caso* en la que se consigne la identificación de vulnerabilidades psico-sociales y socio-penales que en su conjunto hayan contribuido a la actual situación de detención, siendo esto el resorte del Diagnóstico y Pronóstico criminológicos.

Por último, es importante ubicar cambios sustanciales respecto del tratamiento de la salud mental como variable asociada (o no) a la ejecución penal. Al respecto, el modelo abandona el informe psicológico que reeditaba psicodiagnósticos realizados solo por el área de criminología para incorporar un informe interdisciplinario e integral de salud psicofísica, producido de forma conjunta entre el Servicio Criminológico y el Área Médica. Las agencias enunciatarias dan cuenta de la incorporación de la Salud Mental como derecho, y no solo como predictor de “peligrosidad”. Esto no solo es posible reconocerlo en el contenido sino en sus límites, dado que es expreso el deber de no excederse en el objeto de la indagación. Estos elementos y el contenido esperado de este informe son solidarios de lo normado por la Ley 26.657:

debe destacarse la vigencia de la Ley N° 26.657 (Ley Nacional de Salud Mental); a partir de la cual la salud mental debe ser abordada como una problemática multideterminada por factores económicos, sociales, culturales, biológicos, psicológicos e incluso históricos (y no simplemente en términos de enfermedad); que identifica a la/el padeciente mental como una persona en situación de alta fragilidad psico-social, que precisa acciones concretas del Estado. (BPN 793/2022)

De esta manera, este momento institucional marca una clara adherencia al espíritu y letra de la Ley Nacional de Salud Mental como a su soporte último, el enfoque de derechos.

Gabriela Rojas Breu*IV.I.IV. Actualidad.*

El 24 de junio de 2024, se aprueba el BPN 841, que presenta un nuevo modelo de Historia Criminológica. Este modelo responde a necesidades institucionales y pretende recoger los aspectos benignos de sus antecesores. Al respecto, es dable señalar que el modelo anterior encontró obstáculos en su implementación explicados, en parte, por la inercia institucional que no alcanza el ritmo de un cambio formal. Por lo tanto, esta limitación se tradujo en un nivel mayor de discrecionalidad de los actores implicados en el proceso, lo cual, claramente, es lo contrario a lo que se buscaba. Ahora bien, esta explicación no es compartida por el documento, que atribuye la dificultad a lo siguiente: “las bases mencionadas no se encuentran fundadas en evidencia, estudios sistemáticos o estadísticas validadas sobre los principales indicadores necesarios para el sistema”, argumentos que no dejan de reconocer un positivista. Esto es elocuente en el siguiente pasaje: “Estas premisas, fuertemente vinculadas a los postulados de la criminología crítica, han llevado a la inexistencia de un modelo teórico adecuado que sustente el trabajo de la administración penitenciaria”. Es decir, las perspectivas cualitativas - absolutamente respaldadas por la comunidad científica - son consideradas ateóricas. Es dable pensar que la distancia entre la tradición institucional y el corpus normativo asociado y la pretensión de una criminología crítica en un discurso oficial no llega a ser suturada, y en su lugar, efectivamente, la discrecionalidad emerge, lesionando el principio de legalidad ejecutiva. Esto lleva a celebrar, en algún punto, la adopción de un marco teórico “intervencionista”, por decirlo de alguna manera. Por este motivo, el modelo actual recupera, entonces, la criminología aplicada y pondera la evaluación de variables que conforman riesgos criminógenos, ya sean estas estáticas o dinámicas, a los efectos de identificar las necesidades específicas de la persona y tomar decisiones objetivas sobre el contenido de su tratamiento penitenciario. Se vuelve a restringir la valoración a la esfera individual, con el aval de técnicas que combinan métodos actuariales y mixtos.

En este sentido, establece que, en consonancia con lo normado en el artículo 13 bis de la Ley N° 24660, incorporado por el art. 9° de la Ley N° 27375, “el informe del organismo técnico-criminológico debe indicar específicamente los factores que influyen en la conducta criminal y las modificaciones necesarias en la personalidad del interno para cumplir con el tratamiento penitenciario”. De esta manera, el proceso de confección de la HC debe responder al objetivo de “evaluar en profundidad la personalidad del interno y las características de su conducta criminal, identificar los factores que inciden en la reincidencia delictiva, diseñar un plan de tratamiento penitenciario individualizado y efectivo, y promover la reinserción social”. El paradigma etiológico, entonces, vuelve a ocupar su lugar en la escena oficial, tras una búsqueda manifiesta:

Con la aprobación de la Historia Criminológica Interdisciplinaria (Boletín Público Normativo N° 793), se ha eliminado uno de los informes más valorados en cuanto a su contenido y calidad de información: la “Génesis de la Conducta Delictiva”. Este informe era fundamental para la elaboración de estrategias de tratamiento individualizado, ya que aportaba respuestas detalladas sobre el cómo, cuándo y dónde de la conducta delictiva. (BPN 841, 2024, p. 7)

Gabriela Rojas Breu

El informe psicológico también vuelve a alejarse de lo establecido por la Ley 26.657, retornando a las intenciones tradicionales. Sin embargo, hay aspectos que merecen ser destacados:

Para la elaboración del Informe Psicológico para Personas privadas de la libertad Condenadas y de un buen diagnóstico criminológico, es crucial indagar en las variables psicológicas que influyen en la comisión de actos delictivos, así como en la capacidad del individuo para respetar y comprender la ley, el acto delictivo, la sanción y la valoración de estos últimos aspectos. (BPN 841, 2024, p. 33)

Una lectura poco atenta puede dejar pasar un aspecto de forma que resulta vital con respeto de las garantías *ut supra* señaladas y, probablemente, eco del debate laborioso. En efecto, este informe ya no va a indagar todo lo que un psicodiagnóstico pretende, sino que va a preservar la esfera íntima, reconociendo los límites a la indagación en los constructos que la ley establece para la finalidad de la pena. Por otra parte, el modelo no deja de asumir que, si bien la responsabilidad del Estado no es el eje central de la intervención, no se desconocen las variables psico-sociales y socio-penales.

V. Conclusiones.

El trabajo analizó diversas fuentes de regulación de la psicología en el marco de la ejecución penal. De dicho análisis surge que estas fuentes delimitan un campo en tensión signado por el desencuentro de dos paradigmas. En efecto, configuran una trama compleja que intersecta dos paradigmas distales y polarizados en torno a la salud mental: el enfoque de derechos versus el del control social. El desarrollo expuesto permite advertir que posiciones vinculadas al control social ostentan mayor eficacia simbólica. Esto se explica, al menos en parte, por la persistencia de la escuela positiva. Es dable citar, en particular, la vigencia de la psicopatologización y del paradigma etiológico, que solo han abandonado la escena de forma espasmódica de manera reciente y por un corto período.

Ahora bien, una mirada reflexiva asistida por la regulación legal primaria de la profesión, constituye una herramienta sustancial para orientar la práctica profesional en el campo de la ejecución penal, sin dejar de cumplir el rol institucional establecido en el marco legal correspondiente. La ley y la ética comulgan en dicha orientación, promovida por las perspectivas críticas. En este sentido, es imperativo desinvisibilizar la relación *estructural* entre la criminología y el poder para evitar incurrir en un rol para el cual ni la Ley de Ejercicio Profesional 23.277 ni la Ley de Salud Mental 26.657 nos habilita: la de ser agentes del control social, “valorando peligrosidad” bajo el eufemismo del “riesgo”. El modelo positivista, aún no perimido, genera las condiciones para lo contrario toda vez que supone una asepsia que oculta y niega aquella vinculación en el marco de maniobras reductoras. Si tal conexión no existe, solo queda la responsabilidad individual y la psicopatología. Esto ofrece a la psicología dos lugares que se niegan mutuamente y que excluyen la neutralidad como opción posible.

La pregunta problema que ha impulsado este trabajo confirma la hipótesis planteada: existen dos paradigmas en pugna con impacto sustancial dispar en pos del control social, en consonancia con una retención persistente de la formulación positivista, que desplaza a un segundo plano – pero no excluye – la herencia de la escuela clásica y los

Gabriela Rojas Breu

aportes de las perspectivas críticas. No obstante, en los últimos años se advierte una dinámica polifónica y vital, que enriquece los debates y jerarquiza sus productos.

La psicología debe ser agencia en aquel campo del debate que permite rescatar la dimensión subjetiva, sin incurrir en deslizamientos de sentido que lesionan su regulación legal. En efecto, dicha dimensión suele ser compelida al ostracismo. Diversas unidades de análisis operan esta expulsión: la libertad hipostasiada, el determinismo predictor o el celo de la reacción penal. Todos los esfuerzos por reponer las elipsis solidarias de los reduccionismos son fundamentales: la que invisibiliza la dimensión política de la pena y el delito y la que niega el sujeto que se muestra en el acto transgresor. Solo cabalgando en coordenadas complejas que rechazan polarizaciones dogmáticas y acrílicas la psicología podrá preservar el ordenamiento jurídico integral que la alcanza en su desempeño en el marco de la ejecución penal.

Referencias.

- Andrews, D. A. & Bonta, J. (1994). *The psychology of criminal conduct [La psicología de la conducta delictiva]*. (1a ed.). Anderson.
- Anitúa, G.I. (2005). *Historia de los pensamientos criminológicos*. Ed. Del Puerto.
- Baratta, A. (2004). *Criminología crítica y crítica del derecho penal. Introducción a la sociología jurídico penal*. Siglo XXI
- Basaglia, F. (1987). *Los crímenes de la Paz*. Siglo XXI
- Beccaria, C. (1764). *De los delitos y de las penas*. Aguilar.
- Farrall, S. (2002). *Rethinking What Works with Offenders: Probation, Social Context and Desistance from Crime* [Repensar lo que funciona con los delincuentes: libertad condicional, contexto social desistimiento del crimen]. Willan Publishing.
- Grispigni, F. (1947). *Derecho penal italiano*. (1ra Ed.). Giuffré
- Grüner, E. (2007). *Las formas de la espada. Miserias de la teoría política de la violencia*. Colihue.
- Heller H. (1992). *Teoría del Estado*. FCE.
- Laub, J., y Sampson, R. (2003). *Shared Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to Age Seventy* [Comienzos compartidos. Vidas divergentes: jóvenes delincuentes hasta los setenta años]. Harvard University Press.
- Lombroso, C. (1876). *L' uomo delinquente* [El hombre delincuente]. Ulrico Hoepli editore.
- López, A. y Machado, R. (2004). *Análisis del régimen de ejecución penal*. Fabián J. Di Plácido Editor.
- Llull Casado, V. (2025). Salud mental, marginalidad y poder. Ley y control social en S. Puhl, M. Izcurdia, M. de la Iglesia (Ed.), *Actualizaciones en psicología jurídica* (pp. 80-84). APJRA
- Maruna, S. (2001). *Making Good* [Haciendo bueno]. American Psychological Association.
- Pavarini M. (1983). *Control y dominación. Teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico*. Siglo XXI.
- Rojas Breu, G. (2020). Criminología del acto, política o de autor: las fórmulas de la sinécdoque y el imperativo de integración [Trabajo libre]. XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de

Gabriela Rojas Breu

- Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.
<https://www.aacademica.org/000-007/865>
- Simonetti, J.M. y Virgolini, J. (2003). *Criminología, política y mala conciencia*. Editores de Puerto.
- Trotter, C., McIvor, G. Y Mc-Neill, F. (Eds.) (2016). *Beyond the Risk Paradigm in Criminal Justice* [Más allá del paradigma del riesgo en la justicia penal]. Palgrave Macmillan
- Varela, O. (2020). *Psicología jurídica. 30 años construyendo saberes*. JCE Ediciones.
- Varela, O. y Rojas Breu, G. (2021). Acerca de la responsabilidad penal: reconstrucción y sistematización de sus acepciones teórico-conceptuales en el campo de la criminología. *Constructos criminológicos. Revista internacional de investigación en criminología*. 1(1), 7-26.
<https://orcid.org/0000-0003-2452-2121>
- Zaffaroni R.E. (2003). *Criminología: aproximación de un margen*. Editorial Temis.
- Zaffaroni, E. R. (2005). *En busca de las penas perdidas (Deslegitimación y dogmática jurídico-penal)*. Ediar
- Zaffaroni, E. (2012). *Estructura básica del derecho penal*. Ediar.

Gabriela Rojas Breu